

# PRESENTACIÓN

Marcos Peña Pinto

*Presidente del Consejo Económico y Social*



Usando una cronología propia del Consejo Económico y Social, podríamos decir que hace veinte Memorias, el primer presidente del Consejo, Federico Durán, presentaba la primera *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España*, correspondiente a 1993. Y al hacerlo subrayaba la importancia de llegar a puntos de vista comunes sobre cuestiones respecto de las que los criterios podían ser muy diversos, según las distintas organizaciones que integran el Consejo.

Afortunadamente, el tiempo ha pasado, los consensos sobre la Memoria se han reiterado y parece lógico, y también de justicia, subrayar, al presentar esta Memoria correspondiente a 2012, la persistencia de los diagnósticos compartidos, incluso en estas épocas de extrema complejidad y dificultad. Sin duda lo que aporta valor a esta Memoria, mas allá de la evidente amplitud y profundidad de sus contenidos, es lo que tiene de posición común en el diagnóstico de nuestra economía y nuestra sociedad desde intereses que pueden entrar en el terreno del conflicto. Diagnóstico, y también líneas de avance en propuestas concertadas. A continuación resumiremos los aspectos de la Memoria en los que el diagnóstico puede decirse que va mas allá de la pura descripción.

Para el CES, la recaída del producto interior bruto (PIB) en la Unión Europea en 2012 es fruto, en gran parte, de deficiencias institucionales y de la desconfianza que estas han generado en los agentes económicos. Hay dificultades para la gestión de una Unión que no dispone de instrumentos para ordenar sus respuestas a la crisis, debido a su insuficiente construcción política e institucional. La zona euro es débil por el contagio al núcleo central de las dificultades de algunas economías. Y la fortaleza del euro supone un freno a las exportaciones.

Hay una cierta pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias. Se está produciendo un salto cualitativo institucional sin un aumento similar de la legitimidad democrática. Falta coherencia entre las propuestas de gobernanza económica centradas en el ajuste fiscal y salarial y la Estrategia macroestructural Europa 2020. Es preciso flexibilizar la senda pactada de la consolidación fiscal e impulsar la demanda a escala europea. Y esto, dadas las restricciones fiscales de los países periféricos, debería basarse en la expansión de la demanda y el consumo internos en los países superavitarios y en el aumento de la inversión pública financiada con fondos europeos.

La fragilidad del sistema bancario europeo y su nexa con la deuda soberana muestran la importancia de la unión bancaria y de un marco presupuestario integrado. En este marco, a cambio de un reforzamiento de los instrumentos de disciplina macroeconómica, se

debería avanzar hacia una mayor capacidad fiscal a escala de la Unión Europea, capaz de neutralizar *shocks* asimétricos como los que caracterizan esta crisis.

Esta Memoria considera que el decrecimiento de la economía española se debió a la caída de la demanda interna. Por el contrario, el sector exterior fue el motor de la economía española, y la explicación de este comportamiento no está solo en la competitividad-precio de las exportaciones españolas. La creciente diversificación geográfica y sectorial, la ampliación del número de empresas que exportan, la existencia de grandes empresas exportadoras con elevados niveles de productividad y competitividad, las mejoras en innovación, calidad o labores gerenciales y organizativas, son factores que explicarían el aumento de la competitividad exterior de la economía española.

El endeudamiento de la economía española avanzó por la caída del PIB, las mayores necesidades de endeudamiento de las Administraciones y la lentitud del desahucio del sector privado. La restricción crediticia a empresas y a hogares se intensificó por el deterioro de la solvencia de los prestatarios y por el endurecimiento de las condiciones aplicadas por las entidades financieras. La dificultad de financiación es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los empresarios, especialmente las pymes, para contribuir a la recuperación.

A pesar de las subidas impositivas las Administraciones cerraron el año con un déficit superior al del año anterior, si bien, de no tener en cuenta el gasto en ayudas a la banca, el déficit se habría visto reducido. La incapacidad de aumentar los ingresos públicos es el principal factor que impide avanzar en la corrección del déficit. Esto se relaciona con la contracción de bases fiscales debido a la recesión y con la vinculación de la capacidad recaudatoria a un modelo de crecimiento agotado, basado en la actividad inmobiliaria, el endeudamiento y la demanda interna. Por ello, el CES estima que habría que plantearse una reforma en profundidad, integral y con visión de largo plazo del sistema fiscal.

En la perspectiva territorial, el PIB per cápita disminuyó en todas las comunidades autónomas, con un empeoramiento de la mayor parte de las menos desarrolladas, frente a cierta mejora de las más avanzadas. El aumento de la dispersión regional en renta por habitante, en un contexto de reducción de los fondos estructurales europeos, pone en serio riesgo la cohesión territorial.

La Memoria parte de la consideración de que 2012 fue el segundo peor año para el empleo después de 2009. La tasa de paro está por encima de los valores anteriores de la EPA desde 1977. La población activa descendió por primera vez desde 1976 por el efecto combinado del nulo crecimiento vegetativo de la población española, del incipiente saldo migratorio negativo de esta población y del cambio en el saldo migratorio de la población extranjera, con más salidas que entradas (el factor determinante).

El diálogo social entre sindicatos y empresarios produjo acuerdos importantes, como el II AENC y el V ASAC. Pero la negociación colectiva se mantuvo en cifras bajas, por las dificultades en la determinación de los incrementos salariales relacionadas con la profundidad de la crisis. Los convenios con efectos económicos en 2012 suponían el 59,5

por 100 de los convenios y el 62 por 100 de los trabajadores con respecto al último año. Se produjo un repunte significativo de la conflictividad por huelgas, con 1,29 millones de jornadas no trabajadas, que suponen un 166 por 100 más que el año anterior.

El incremento salarial medio pactado fue del 1,5 por 100, nueve décimas inferior al de 2011 y a la inflación registrada en 2012. El salario medio efectivo registró, por primera vez, una tasa de variación anual negativa.

En el ámbito de la protección social, el CES subraya cómo la Seguridad Social finalizó 2012 con un déficit del 0,96 por 100 del PIB en términos de contabilidad nacional, y del 0,55 por 100 en ejecución presupuestaria del sistema. La caída de la afiliación llevó el nivel de ingresos por debajo del gasto en prestaciones contributivas. Las tensiones de liquidez del sistema hicieron necesaria la utilización del Fondo de Reserva hasta en tres ocasiones.

En el sistema sanitario se observaron en 2012 condiciones de acceso a los servicios más restrictivas, reducción de prestaciones y cambios en la participación de los usuarios en la financiación. El gasto sanitario registró en 2010 una caída del 2 por 100, algo inédito en la historia del SNS, debida en gran parte a la reducción de gasto farmacéutico.

La Memoria afirma que, en una etapa en la que hubiera requerido de un mayor empuje, el sistema de atención a la dependencia ha entrado en una fase de retroceso. Cada año es más evidente el predominio de las prestaciones económicas frente a los servicios de atención, en contra a lo estipulado en la Ley. Por otro lado, la falta de información sobre la financiación del sistema dificulta el análisis de su evolución.

Continuando análisis anteriores, el CES afirma que la calidad de la educación sigue siendo prioritaria para impulsar la competitividad, lo que contrasta con la falta de consenso político sobre cómo tratarla. El abandono escolar temprano, a pesar de su ligera reducción con la crisis, aún es el principal problema educativo en España.

En un tema social y económicamente sensible como el de la vivienda, el CES observa con preocupación algunas situaciones paradójicas: aunque el descenso de los precios de la vivienda en propiedad debería facilitar el acceso a la misma, el incremento del desempleo, la incertidumbre sobre el futuro y la dificultad de acceso al crédito siguen obstaculizando su materialización. Esto influye en un descenso de la emancipación residencial de los jóvenes, y en el ritmo de creación de nuevos hogares. Y aunque aumenta la propensión al alquiler por estas dificultades económicas de las familias, la oferta de vivienda social en alquiler es muy reducida. Estos datos muestran la necesidad de un nuevo modelo de política de vivienda.

A partir de estos análisis y valoraciones sobre temas específicos, el CES estima, con una visión más general, que la intensificación de las consecuencias de la crisis en prácticamente todas las esferas de la realidad social se produjo en paralelo a cambios sociales y demográficos de relevancia, al tiempo que se aprobaban reformas en línea de estabilidad presupuestaria, con repercusiones en el ámbito de las políticas sociales. A continuación destacaremos tres ejemplos de estos cambios.

El primero, el descenso de la población en edades potencialmente activas, como resultado de varias décadas de descenso de la fecundidad y del mencionado efecto de la emigración, que profundiza en la tendencia al envejecimiento, impulsada también por los avances de la esperanza de vida y una natalidad que ha acelerado su descenso en la crisis.

El segundo, la profundización en el deterioro de los ingresos de los hogares, al tiempo que se transforman las estrategias de vida de los individuos y las familias. Ello guarda estrecha relación con el desempleo, percibido de forma constante como principal problema. El descenso de ingresos y el exceso de endeudamiento empeoran la situación financiera de las familias, sobre todo las de menor renta. Y el consiguiente incremento de los impagos se traduce en un aumento de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria.

Los hogares han ido modificando sus pautas de consumo, dando como resultado lo que podría considerarse un modelo de adaptación a la situación adversa. Los ingresos medios netos por hogar en 2011 se situaban en 24.609 euros/año y el ingreso medio por persona en 9.321 euros/año (1,9 por 100 y 1,3 por 100 menos que en 2011). Se ha producido una reconfiguración del consumo en España con un nuevo descenso interanual del 3,7 por 100, con un claro incremento del peso de la vivienda.

En tercer lugar, el CES subraya cómo la crisis ha aumentado la dependencia de la población de las transferencias sociales, aunque las medidas de consolidación fiscal siguen teniendo objetivos cada vez más estrictos. La situación ha empeorado en la mayoría de las áreas objeto de las políticas sociales.

El alargamiento de la crisis aumenta la incidencia del paro de larga duración, con el riesgo de cronificación de situaciones de pobreza que hasta ahora podían ser coyunturales. La quinta parte de los hogares en España se encuentra en riesgo de pobreza monetaria. La proporción de niños que viven en esta situación supera el 30 por 100, mientras que ha descendido la pobreza entre los mayores de 65 años, por la mayor estabilidad de sus ingresos, algo sin duda muy positivo en lo que tiene de ejemplo del papel central de las instituciones de protección social. La insuficiencia de las políticas de servicios sociales, como las rentas mínimas de inserción, lleva a un trasvase de las solicitudes de ayuda hacia las entidades de carácter no lucrativo, que vienen soportando, cada vez con mayores dificultades, un aumento notable de su actividad.

El CES concluye señalando cómo, tras cinco años de dificultades y sacrificios económicos para los ciudadanos y familias, se requieren mayores esfuerzos en prestar atención a la equidad, la calidad y la eficiencia en la gestión de unos recursos cada vez más escasos, en un entorno de crecientes necesidades sociales.

Como pueden ver, esta Memoria del CES entra en la práctica totalidad de temas que configuran una etapa que antes caracterizamos por su dificultad y por su complejidad. Si hablamos de dificultades, observaremos cómo los rasgos negativos son en gran medida los propios de una situación de crisis, con la especialidad que le otorga la duración e intensidad de esta. Y, junto a esto, conviene señalar que el CES también destaca

factores positivos, como la capacidad exportadora que expresa la existencia de un tejido empresarial con capacidad de adaptación, o la continuidad del diálogo social como muestra de la solidez institucional imprescindible para la recuperación económica.

Y hablamos de complejidad en varias dimensiones. En la dimensión temporal, por la diversidad de resultados que se pueden apreciar según se tome solo la perspectiva del corto plazo o también las del medio y largo plazo. En la dimensión territorial porque, en el caso concreto de una economía integrada en Europa como la española, es cada vez más difícil separar lo que es resultado de acciones a escala europea de lo que se deriva de las peculiaridades de nuestro sistema productivo. Y también en la dimensión que podríamos llamar material o sectorial. A los ejemplos ya conocidos, como el del efecto reductor del crecimiento de las medidas de austeridad o el de la espiral formada por la caída de la actividad empresarial, la pérdida de empleo, la reducción del consumo y el nuevo freno de la actividad económica se unirían otros nuevos: la relación entre restricción del crédito, falta de recuperación empresarial y del empleo y nuevas dificultades de las entidades crediticias por los impagos de deuda originados en la falta de recursos económicos que el desempleo trae consigo.

Pensamos que sin captar la complejidad de la situación será muy difícil afrontar la superación de sus dificultades. Y pensamos también que para desentrañar esta complejidad de la situación socioeconómica son necesarios análisis como los que nos proponemos en esta Memoria. Análisis que describan las muchas facetas de esta realidad, y que también busquen las conexiones, las relaciones entre ellas. Relaciones entre los distintos aspectos de la economía, con conexiones entre la situación económica y la situación social y también entre los cambios sociales y el ámbito económico. De la adopción de una perspectiva como esta dependerá en gran medida que los planteamientos, aún inacabados, de medidas y reformas en relación con la crisis, también inacabada, alcancen sus objetivos.

Comenzamos esta presentación recordando la que en su momento se hizo de la primera Memoria del CES. En ella se hablaba de los integrantes de la primera comisión de trabajo que elaboró el primer proyecto de Memoria. Entre sus nombres encontramos los de dos consejeros, José Manuel Morán y Jorge Aragón, que siguen teniendo esta condición y que han participado también este año de forma muy activa en la elaboración de esta Memoria, en el caso concreto de Jorge Aragón coordinando, junto a Esteban Rodríguez Vera y a Fernando Galbis, y con la presidencia de Jesús Cruz, los trabajos de la Memoria de 2012. Probablemente esta sea una buena imagen de la continuidad de las tareas del CES y del papel central que en ellas tiene esta Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2012 que ahora me honro en presentar.

**MARCOS PEÑA PINTO**

*Presidente del Consejo Económico y Social*

